

Imprimir

De todos es conocida la indignación de miles de educadores y sus beneficiarios (más de 800 mil personas, entre profesores y familias) con los servicios médico asistenciales que prestan dos o tres operadores que monopolizan, desde hace 25 años, los contratos de la salud con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora, la cual administra los fondos con el aporte patronal del Estado a la salud de los docentes y la contribución de los maestros, que de acuerdo con estudios es 1.64 veces lo que vale la unidad per cápita del régimen contributivo.

En estos momentos se ha convocado una licitación por 6 billones de pesos para adjudicar los contratos y escoger las empresas que prestarán el servicio médico asistencial de los profesores al servicio del gobierno, pero todo muestra que este proceso carece de transparencia, puesto que hay “amarres” que bloquean la libre competencia en la selección de los operadores con evidentes perjuicios para la salud de los docentes y sus familias, que no son atendidos adecuadamente en las citas médicas, con especialistas, en los hospitales y en las situaciones de extrema gravedad. Allí hay casos aberrantes con miles de maestros y maestras que mueren en hospitales y clínicas improvisadas para cumplir de manera simulada los requisitos de las convocatorias. Es, lo que, entre otras circunstancias, explica la rebelión de los maestros del Cauca, vinculados a Asoinca, que no se allanan al modelo corrupto y perverso del Fondo de Prestaciones Sociales. Por ese mismo camino marchan otros sindicatos regionales que repudian esta máquina infernal de despojo y enriquecimiento billonario de unas roscas enquistadas desde hace más de tres décadas allí.

El “amarre” de esta licitación viene de tiempo atrás dada la maraña y el nudo de intereses que se han configurado en este dispositivo administrativo y financiero, en que participan políticos corruptos del partido conservador (dueños de Fiduprevisora, como el senador Efraín Cepeda), dirigentes sindicales inescrupulosos y carteles de abogados (Giovanny López y cía), expertos en complejas artimañas, con poderosos tentáculos en el poder judicial, para apropiarse de billones de pesos de la educación colombiana.

El Vice Ministro de Educación, Oscar Sánchez, ha llamado, con justa razón, la atención sobre las irregularidades detectadas en la convocatoria en curso, urgiendo la intervención de

distintos sectores de la vida pública para evitar las ilicitudes y el daño al bienestar de los maestros (Ver <https://www.wradio.com.co/2023/08/07/la-preocupacion-en-el-mineducacion-para-la-licitacion-del-regimen-de-salud-de-los-maestros/>). La posición de Oscar Sánchez es la de un gobierno que se ha comprometido con el cambio de este desastre cargado de múltiples irregularidades y procesos delictuales con graves daños a la educación de calidad de millones de personas. Un gobierno como el del presidente Gustavo Petro no puede guardar silencio frente a esta nefasta herencia de todos los gobiernos anteriores y que ocasiona la huelga periódica de los docentes y su protesta, sustentada en muchos documentos de conocimiento público, pues Fecode paga costosos avisos en la prensa nacional desde hace varios años llamando la atención sobre esta grave problemática social, con descripciones muy puntuales de cómo opera el mecanismo de asalto a los dineros de la Fiduprevisora con cadenas de sobornos y giros a cuentas particulares de intermediarios sindicales y políticos, que la Contraloría General de la República nunca ha investigado a fondo, y menos la Fiscalía anticorrupción.

La preocupación en el MinEducación para la licitación del régimen de salud de los maestros

El viceministro de Educación aseguró que deben garantizar mejoras en el servicio que le brindan a los maestros en el país.

(www.wradio.com.co)

Desde la Auditoria social constituida para el seguimiento de esta operación hemos llamado muchas veces la atención sobre el oscuro y criminal entramado que acompaña la administración del FOMAG y la Fiduprevisora. Ojalá la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República tome cartas en el asunto.

Como fundadores y promotores del Fondo de Prestaciones del Magisterio FOMAG, hemos sido testigos, durante las últimas décadas, de la corrupción rampante impuesta allí por inescrupulosos dirigentes sindicales en contubernio con políticos conservadores y con

empresas de salud de papel organizadas para apropiarse de miles de millones de pesos con mecanismos delincuenciales que los organismos de control se niegan a intervenir.

Antes de adjudicar las licitaciones y de que se repita la historia de juegos marcados es necesario que el gobierno nacional promueva y organice audiencias públicas y asambleas con los educadores para evitar que en la prestación del servicio de salud de los educadores se repitan nuevamente operaciones criminales que implican el robo de los dineros del bienestar de miles de maestros y de sus familiares beneficiarios.

Horacio Duque G.

Foto tomada de: La Crónica del Quindío